

LOS ARGUMENTOS DEL EDI.

Claudio Katz¹

La difusión pública del programa de los Economistas de Izquierda (EDI) provocó la enfurecida reacción de los neoliberales, que calificaron nuestras propuestas de “**stalinistas**” (C.Rodríguez), “**inconstitucionales**” y propias de una “**nomenklatura**” de burócratas (R.Chachanosky). Los voceros mediáticos de la derecha (D.Hadad) respondieron con sus habituales insultos y manipulaciones de la pantalla. Pero las iniciativas del EDI también motivaron cuestionamientos de la centroizquierda (Frenapo, Fénix, ARI) y objeciones a la viabilidad de nuestro proyecto.

¿ES FACTIBLE ACABAR CON EL GENOCIDIO SOCIAL?

El EDI plantea resolver inmediatamente la tragedia que están sufriendo los chicos desnutridos, las familias que comen ratas, las madres que regalan sus hijos y los enfermos subalimentados de los hospitales. Todas las iniciativas de supervivencia que adopta la población sembrando huertas o participando de los comedores comunitarios no alcanzan para frenar el vertiginoso avance de la pobreza sobre 18 millones de argentinos. Proponemos un seguro de desempleo de 626 pesos, la indexación salarial generalizada y la elevación de jubilaciones y sueldos mínimos a 750 pesos.

Nos dicen que estas medidas “**desatarían la inflación**”, como si los aumentos del 30,5% de los precios minoristas y del 95,6% de los mayoristas durante el primer semestre fueran consecuencia de la mejora del ingreso popular. Es evidente que si la inflación dependiera del salario, los precios deberían haber caído en proporción al empobrecimiento de la población.

Reconociendo que el detonante de la carestía no han sido los salarios sino la devaluación, los voceros del empresariado afirman que “**las compañías no pueden siquiera afrontar el incremento de 100 pesos**”, que el gobierno dispuso para una cuarta parte de los trabajadores con empleo formal. Este irrisorio aumento no repone ni la mitad de la pérdida salarial registrada desde principio de año y seguramente quedará licuado por la simple carestía de algunos meses. Es falso que las empresas beneficiadas con la pesificación y la devaluación no puedan absorber una recuperación real del salario. Por el solo efecto de esas medidas, el grupo más concentrado de las compañías exportadoras obtuvo una transferencia de ingresos equivalente a 13.000 millones de pesos.

Es cierto, en cambio, que con los recursos actuales “**el estado y las pequeñas empresas no pueden financiar la mejora salarial**”. Por esta razón, los economistas del EDI proponemos solventar el aumento mediante la adopción de impuestos progresivos. Al cabo de una década de jolgorio impositivo, ya no se puede argumentar que “**la inversión caerá**” o que “**los capitales saldrán del país**” por el efecto de estos gravámenes. Su carencia no impidió el derrumbe de la inversión (promedia los niveles de 1990 y disminuirá este año entre 27% y 49%), ni la expatriación de capitales (ya alcanzó el récord de 127.000 millones de dólares).

Algunos economistas igualmente declararan que es “**muy difícil cobrarles impuestos a los ricos**”. Pero estos obstáculos no son datos inamovibles de la realidad, sino efectos de la complicidad de los altos funcionarios con los capitalistas evasores. Este encubrimiento de clase explica porqué los poderosos ostentan impunemente sus bienes multimillonarios, bloqueando incluso la insignificante iniciativa parlamentaria de gravar con un 5% las ganancias derivadas de la pesificación.

También postulamos financiar la suba de los salarios, las jubilaciones y los seguros de desempleo mediante la reunificación de la recaudación previsional y la eliminación de las AFJP. Algunos despistados sostiene que esta acción “**afectaría a los**

¹ Economista, profesor de la UBA, investigador del Conicet.

aportantes del sistema de capitalización”, sin computar que el 78% de estas contribuciones ya quedó convertido en títulos públicos de un estado insolvente y que a los jubilados de este régimen les aguarda el mismo destino que a los pequeños ahorristas. Terminar con el escandaloso robo de las AFJP contribuirá tanto a frenar la desfinanciación general del sistema de previsión, como a favorecer el futuro cobro de jubilaciones dignas para todos.

Concretar una mejora inmediata del poder adquisitivo mediante la transferencia de ingresos de los capitalistas hacia el grueso de la población es el punto de partida del programa del EDI. Sin embargo, consideramos que en las condiciones de catástrofe económica actual, esta conquista popular no desembocará automáticamente en un “shock redistributivo” de crecimiento y ocupación. Otras medidas resultan indispensables para alcanzar este objetivo.

REALISMO E ILUSIONES FRENTE A LA DEUDA.

Cesar inmediatamente el pago de la deuda es un paso insoslayable para revertir el colapso social. Algunos economistas afirman que es inútil declarar el desconocimiento de una **“deuda que no se está pagando”**. Pero olvidan que si las reservas han caído por debajo de los 10.000 millones de dólares es porque esas erogaciones continúan, como lo prueba el reciente pago de 550 millones de dólares al BID o la precedente transferencia de 680 millones al Banco Mundial. Pero, además, proclamar la cesación del pago no es lo mismo que reconocer de manera angustiosa (Duhalde) o festiva (R.Saa) el default. El EDI postula repudiar el pasivo fraudulento, que aumentó de 8000 millones (1976) a 160.000 millones de dólares (2002) y ya fue pagado 25 veces.

“No alcanza con desconocer la deuda” afirman muchos compañeros, recordando que el destino de los fondos recuperados no es un dato menor. Si estas sumas se aplican al financiamiento de los seguros de cambio o a los subsidios reclamados los grupos empresarios locales, el remedio será peor que la enfermedad. Estos recursos deben canalizarse hacia el gasto social y la reactivación productiva.

Muchos críticos se preguntan cuál sería **“el costo de confrontar con el FMI”**, sin contabilizar primero cuál es el precio de continuar sometidos a los acreedores. Si al cabo de una década de cumplimiento con el Fondo el país está completamente destruido, no es difícil imaginar que nos espera luego del default. Por eso, resulta decisivo poner fin a la inspección mensual de los auditores del FMI, que sólo en los últimos dos meses impusieron leyes de impunidad para los estafadores, normas de apropiación de las empresas en favor de los acreedores y violentas reducciones del gasto social en las provincias. Estas exigencias constituyen apenas el aperitivo de un próximo menú, que incluirá tarifazos y despidos masivos de empleados públicos.

El principal argumento para rechazar la ruptura con el FMI es el **“aislamiento”**, como si este hecho fuera una consecuencia posterior al desconocimiento de la deuda y no una realidad actual, ya perceptible en el corte del crédito internacional, la ausencia de inversiones externas y la tasa récord de “riesgo país”. Pero, además, los neoliberales que presagian mayores desventuras por romper con el FMI son los responsables directos de esta catástrofe. Ellos pronosticaban el embargo de los bienes argentinos si se desconocía la deuda, el estancamiento de la producción si no se privatizaba y la pérdida del ahorro si no se liberalizaban las finanzas. Sus previsiones, sus políticas y su terror ideológico han dejado al país sin bancos y sin industria.

“Por el camino del EDI enfrentaremos solitariamente a los Estados Unidos” advierten otros críticos, sin darse por enterados de la acelerada extensión de la crisis a toda Latinoamérica. El desplome bancario en Uruguay, el posible default de Brasil, la caída de entidades en Paraguay y la salida de capitales en Perú, Venezuela y Colombia revelan que la depresión argentina ya “contagia” a una región afectada por la misma carga del

endeudamiento. Esta generalización del temblor financiero favorece la lucha regional conjunta contra el FMI y debilita la política norteamericana de escarmiento a la Argentina.

Pero observando la obsesión de los gobiernos por “diferenciarse” de nuestro país, muchos analistas destacan que **“los países latinoamericanos no actuarán en común”**. Con esta evaluación, solo registran la profesión de fe fondomonetarista de Batlle, FH Cardoso y Fox, sin considerar la creciente hostilidad popular frente a ese sometimiento. Mientras los presidentes se esfuerzan por demostrarle a los banqueros “que son distintos”, los trabajadores y campesinos afianzan su lucha antiimperialista común y su giro político convergente hacia la izquierda. Esta escisión confirma que los artífices de la batalla contra la deuda serán los pueblos movilizados y no las clases dominantes, incapaces de erigir una moneda regional o conformar un genuino frente de deudores.

Los economistas de centroizquierda aceptan la legitimidad de las propuestas del EDI, pero consideran **“que es más realista”** intentar la **“renegociación de la deuda”** basada en una **“quita del pasivo”** y en su denuncia **“ante el Tribunal del La Haya”**. Pero esta política ya fue intentada en el pasado y condujo a repetidos fracasos. Todas las renegociaciones desde el Brady hasta el megacanje abultaron la deuda que no disminuirá con “perdones”, porque luego de la devaluación el pasivo prácticamente duplica al PBI.

El carácter fraudulento de la deuda ya fue probado y corroborado innumerables veces fuera y dentro del país. Esta fundamentación jurídica brinda argumentos para la lucha consecuente contra los acreedores, pero es completamente inservible cuando es utilizada para hacer convocatorias altisonantes que carecen de efectos prácticos. En lugar de recrear nuevas ilusiones en ablandar al FMI se impone reconocer que el único camino para emerger del abismo es la ruptura con los acreedores. Sólo esta decisión podría concitar la solidaridad internacional que la Argentina necesita mucho más que cualquier donación de remedios o alimentos.

Romper con el FMI es el camino de esta acción común con los pueblos del mundo, porque institución sintetiza la opresión imperialista de todo el planeta. No es un organismo que **“cometió errores”** y **“ya no cumple con su misión”**, como se ha puesto de moda caracterizar desde que algunos neoliberales (J.Stiglitz o J.Sachs) comenzaron a mostrarse conmovidos por las atroces consecuencias del ajuste. Seguirles la corriente y citarlos como autoridades morales o sabios de la economía conduce a recrear falsas expectativas en los opresores y a olvidar que los únicos aliados de nuestra lucha contra el tormento de la deuda son los explotados del mundo.

CON LOS AHORRISTAS, CONTRA LOS BANQUEROS.

Los economistas del EDI apoyamos activamente la movilización de los pequeños ahorristas estafados por Cavallo, pesificados por Remes y confiscados con el bono de Lavagna. Sus fondos quedaron apresados, mientras los grandes capitalistas fugaban sus capitales antes del corralito, o los rescataban mediante turbios amparos judiciales. Proponemos que se haga justicia y se encarcele a los responsables del fraude. Exigimos que se proceda a la expropiación de los bienes en el país de los banqueros que no devuelvan los ahorros y reclamamos la eliminación total del mecanismo indexatorio (CER) que empobrecerá masivamente a los pequeños deudores.

“Pero el dinero de los ahorristas ya se perdió” argumentan los voceros de la banca, sin aclarar quién se apropió de estas sumas. Con total impunidad los banqueros declaran que la “plata desapareció”, como si se hubiera esfumado espontáneamente. Pero su campaña para consagrar este robo forzando a los pequeños ahorristas a resignarse ha fracasado. En los últimos dos meses, la movilización de los afectados recuperó vigor en las calles, avanzó en organización y ha culminado en la generalizada negativa a aceptar el bono del gobierno (Boden), que los bancos intentaron colocar por todos los medios.

Este rechazo constituye también una derrota para los “banqueros progresistas” (C.Heller), que hicieron lo imposible para demostrar que el bono era **“el mal menor y la única solución posible”**. En lugar de agachar la cabeza, los pequeños ahorristas han extendido internacionalmente sus reclamos, demandando directamente a los bancos en sus sedes centrales, a partir de la jurisprudencia que responsabiliza a las casas matrices por las acciones de sus filiales en el exterior. Al llevar este reclamo a Europa, Estados Unidos y Canadá, los afectados alientan la campaña mundial contra los estafadores.

Los pequeños ahorristas acusan a los banqueros y al FMI, en oposición a la campaña derechista por presentar **“al estado como único culpable”**. Esta acusación oculta que los funcionarios de Menen, De la Rúa y Dhulade perpetraron la confiscación a cuenta de los financistas. Pero además, los custodios neoliberales de la austeridad fiscal no objetan los bonos compulsivos, que costará 23.000 millones de dólares a las finanzas públicas. Estos títulos se desvalorizarán aceleradamente y serán acaparados por los grupos capitalistas -que repitiendo lo ocurrido con las privatizaciones- cancelarán deudas o harán grandes negocios a costa del estado.

Quiénes manejan los hilos de esta operación se proponen reconstruir los bancos, una vez consumada la expropiación de los ahorristas por tres vías: el despido de 50.000 empleados bancarios, la concentración total de los préstamos y la privatización de las entidades públicas. Cuándo afirman que **“ninguna economía puede funcionar sin sistema financiero”**, no aclaran que trabajan en favor de un régimen extranjerizado, que eliminará por completo el crédito por el consumo masivo y las pequeñas empresas.

El FMI se apresta a comandar este proceso de “offshorización” bancaria, mediante el otorgamiento de inmunidad a los directores del Banco Central, el control de los redescuentos, el monitoreo de las fusiones y la legalización de un mecanismo de depósitos locales asegurados por entidades foráneas. Después de lo ocurrido con el corralito los neoliberales promueven esta operación en silencio, ya que no pueden argumentar que la extranjerización **“tornará más confiable al sistema”**. Se ha probado claramente que los bancos foráneos lejos de contener una corrida, se ocupan de canalizarla, para luego preparar su propia salida del país.

Frente a esta perspectiva de extinción del crédito orientado al bienestar popular, el EDI propone la nacionalización inmediata de los bancos, sin ningún tipo de indemnización y bajo control de los empleados y los organismos populares. Esta medida es la única salida progresista, porque la **“constitución de una banca mixta con depósitos controlados por el estado”** que proponen los economistas de la centroizquierda es un proyecto poco realista. Lo que está en juego es la respuesta inmediata frente al cierre de muchos bancos. O se acepta pasivamente esta clausura, avalándola con alguna socialización de las pérdidas, o se procede a confiscar los activos y propiedades de los bancos que levantan anclas. Frente a este dilema, no existe una tercera vía.

NI PRIVATIZADAS, NI VUELTA AL PASADO.

Algunos críticos han interpretado que la propuesta del EDI de reestatizar las empresas privatizadas bajo control de los trabajadores y usuarios **“aumentará el quebranto fiscal del estado”**. Pero este déficit crecería si concediéramos las indemnizaciones que rechazamos de plano, porque existen sobradas razones jurídicas y económicas para desconocer este tipo de compensaciones. Las empresas violaron una y otra vez los contratos, incumplieron las cláusulas de inversión, desconocieron las reglamentaciones y actuaron sin respetar ningún tipo de control por parte de los consumidores. Los gastos que realizaron ya quedaron sobradamente cubiertos por las cuantiosas ganancias que acumularon. En la última década, 26 compañías privatizadoras acapararon el 56,8% de los beneficios obtenidos por las 200 principales empresas que operan en el país. Cobraron tarifas tres veces superiores a las vigentes a escala

internacional y remitieron al exterior el 73% de sus ganancias. Gran parte de su endeudamiento actual encubre autopréstamos con sus casas matrices, que deben ser inmediatamente investigados.

Desde la devaluación comenzó un acelerado proceso de deterioro de los servicios, que se profundizará a pesar de los inminentes aumentos tarifarios. Una vez comenzados los apagones, los cortes telefónicos y la interrupción del gas o el agua se precipitará una crisis, que puede terminar empujando al estado a **“hacerse cargo de compañías vaciadas”**. Por eso, el EDI propone evitar este tipo de reestatización a pura pérdida, imponiendo ya mismo el control popular sobre estas compañías.

La recuperación estatal de las empresas debería iniciarse por Repsol-YPF, que es la compañía más lucrativa y estratégica para el desarrollo industrial. Resulta también imprescindible frenar los aumentos de tarifas y cortar los subsidios a los contratistas, que en plena crisis continúan recibiendo fondos del estado (1,3 millones de pesos diarios, por ejemplo, para los concesionarios de peaje). Pero escalar la reestatización de acuerdo a ciertas prioridades, no es lo mismo que **“renegociar los contratos”**. Este tipo de tratativas avala el fraude inicial de las privatizaciones y conduce al estado a hacerse cargo de las pérdidas (Azurix, Rio Turbio, Ferrocarriles, etc), mientras las compañías se reservan los negocios rentables.

Se afirma que junto a la reestatización **“volverá a la ineficiencia de las viejas empresas públicas”**. Pero el EDI no propone un retorno al sistema de compañías manejadas por burócratas asociados con los contratistas, ya que el manejo indirecto de Perez Companc sobre YPF no es mejor que su actual control directo de los pozos petroleros. Planteamos crear nuevos sistemas de gestión basados en la participación de la población. Esta intervención deberá incluir no sólo auditorías y mecanismos para transparentar resultados o efectivizar controles cruzados, sino también formas de elección popular de los directivos. Si se elimina el nicho de corrupción que representa el lobby de los contratistas privados existen más posibilidades de erigir un sistema de servicios públicos baratos y eficientes.

PRIORIDADES DE LA REINDUSTRIALIZACIÓN.

El programa del EDI apunta a estimular un acelerado proceso de reindustrialización a través de la inversión y el crédito públicos. Esta estrategia parte de una simple constatación: al cabo de cuatro años de depresión y ante un derrumbe previsible de 15% del PBI, ningún capitalista programa inversiones. Al contrario, sólo calculan el número de fábricas a cerrar y el monto de demandas contra el estado nacional que presentarán en los tribunales de Nueva York.

A pesar de estas evidencias, los economistas neoliberales siguen alertando contra el **“retroceso tecnológico”** y el **“desabastecimiento de insumos importados”** que provocaría una **“política intervencionista”** de reindustrialización. No parecen haber registrado que estos problemas ya existen y no son producto de ningún “estatismo”, sino de la crisis, la devaluación y el default. Y tampoco notan que estas dificultades se agravarán si la desarticulación del tejido industrial perpetrada en la última década no se revierte. El mayor peligro que afronta el país no es la carencia temporaria de ciertos insumos, sino el desmantelamiento sistemático de su estructura productiva.

Es falso que la reindustrialización propuesta por el EDI aliente el **“déficit fiscal y la corrupción”**, porque no promovemos recrear el fraude de la “promoción industrial”, ni canalizar los fondos públicos hacia la UIA o solventar obras de construcción con el pago de salarios con lecops. Tampoco se nos ocurre avalar la estatización de 35.000 millones de dólares de pasivos externos que reclaman las 30 empresas del lobby AEA. Cuando hablamos de reindustrialización apuntamos a la utilización de los fondos públicos en

proyectos de apoyo a los trabajadores, cooperativistas y pequeñas firmas. Las empresas recuperadas por sus obreros figuran en el primer lugar de esta lista.

Las 80 fábricas abandonadas por sus dueños y ocupadas por sus operarios desmienten el mito de la **“insustituibilidad del capitalista”** y demuestran la factibilidad de la gestión obrera. Lo que amenaza la viabilidad de estos emprendimientos no es la falta de capacidad de los operarios, sino la incertidumbre jurídica de estas compañías (no se sabe quién es el propietario), su ahogo financiero (las deudas anteriores siguen pendientes) y la carencia de insumos y mercados. El EDI se hace eco de los reclamos obreros: expropiación sin indemnización, pasivos a cargo de los viejos dueños, créditos para el funcionamiento de las empresas y demanda estatal para sus productos. La conformación de un área unificada de este sector constituiría un gran paso hacia un sistema de planificación obrera de la industria.

También deben destinarse prioritariamente los fondos públicos a este tipo de empresas, en los casos de opción mayoritaria por formas de propiedad cooperativa. Pero hay que tener cuidado al presentar a las cooperativas como **“una forma ideal de gestión”**. Esta modalidad se vuelve en contra de los trabajadores, cuándo los operarios asumen los pasivos, pagan el alquiler o se asignan sueldos miserables para sostener una actividad que termina en la terciarización. La cooperativa no debe encubrir tampoco negocios inmobiliarios o el enriquecimiento de sus administradores. Se impone establecer una clara reglamentación que permita a los cooperativistas ejercer el control efectivo de su labor en el marco de un plan general de la industria.

Este programa requiere, por otra parte, estabilizar la moneda y respaldar su cotización mediante el control de cambios y el monopolio del comercio exterior. A veces se afirma que este manejo sería **“discrecional”** y **“burocrático”**, como si la gestión privada actual de las exportaciones e importaciones fuera un ejemplo de competitividad y transparencia. Sólo 20 compañías controlan esta estratégica actividad y el 80 % de los embarques al exterior se concentra en manos de Repsol, Cargill, Techint, Arcor, Deheza, P.Companc, Siderca, Nidera y algunas automotrices. Cada vez que retienen divisas para especular con la cotización del dólar provocan un temblor cambiario. Sin control del comercio exterior ningún plan de recuperación económica será perdurable.

LA PERSPECTIVA SOCIALISTA.

Los economistas del EDI proclamamos abiertamente nuestros objetivos socialistas, porque la crisis argentina obedece a la compulsión expropiatoria del capitalismo y no sólo al modelo neoliberal o al agravamiento de la dependencia. La derecha proclama que nuestro proyecto conducirá a **“una vuelta al pasado”**, como si la Argentina hubiera experimentado un ensayo de comunismo durante los 90 o hubiera conocido algún sistema diferente al capitalista a lo largo de su historia.

También alertan contra la **“pérdida de libertades económicas”**, omitiendo que fueron ellos y no los socialistas quienes gobernaron por decreto, delegaron poderes al ejecutivo y aprobaron privatizaciones con banecos y diputruchos. Sólo el control capitalista de los medios de comunicación les permite a los artífices de la concentración económica continuar hablando de los derechos individuales. Los neoliberales utilizan este manejo mediático para descargar culpas sobre **“los políticos”**, ocultando que los gobernantes peronistas, radicales y frepasistas trabajaron junto a ellos al servicio de los grupos capitalistas.

La derecha prefiere impugnar un porvenir socialistas antes que hablar del pasado reciente, porque discutiendo hipótesis futuras elude el balance de lo ocurrido en los últimos años de empobrecimiento, depredación y confiscación masiva de los ingresos. En vez de analizar al **“capitalismo realmente existente”** se refugian en divagaciones sobre el **“capitalismo imaginario”** que alguna vez leyeron en los libros de texto. Cuándo se cansan

de estos relatos glorifican el **“los éxitos del Primer Mundo”**, pero omitiendo describir el funcionamiento del orden imperialista en que se apoyan estos logros. En sus idílicas pinturas del universo, nunca perciben que la tragedia argentina es semejante a la padecida por millones de hambrientos y explotados de Africa, Latinoamérica y Asia.

La crisis argentina no es la excepción en un mundo de bienestar. Constituye un caso agudo de regresión económica capitalista, cuyos efectos regionales ya preocupan a los hombres del imperialismo que han colocado al país en la lista de “estados fracasados” que deberían transformarse en protectorados. La “comisión de notables” que enviará el FMI para asumir directamente el manejo del Ministerio de Economía forma parte de este plan, que algunos personajes como Dornbursch han explicitado con total crudeza. Frente a esta perspectiva de opresión neocolonial, el socialismo constituye la única perspectiva de resistencia y liberación.

EL AMBITO DE LOS ECONOMISTAS DE IZQUIERDA.

El EDI surgió al calor de la sublevación popular del 19 y 20 de diciembre. Es un producto directo de esa rebelión, que registró un nuevo avance luego de las tres manifestaciones masivas contra el asesinato de dos piqueteros. Los economistas de izquierda estamos completamente integrados con las nuevas formas de acción directa y deliberación colectiva que se han gestado en los piquetes y en las asambleas populares. Elaboramos propuestas a través de un diálogo con los trabajadores, los desocupados y los vecinos autoorganizados. No estamos proponiendo un plan de gobierno, ni un equipo de funcionarios para continuar manejando desde arriba los resortes del poder a favor de la clase dominante.

Nuestro trabajo está dirigido a los organismos populares, los partidos de izquierda y todas las instancias de lucha social y democrática. Proponemos iniciativas para debatir con todos los participantes de las marchas, las deliberaciones y embriones de gestión popular directa. Sugerimos medidas que solo podrán conquistarse a través de la lucha y cuya implementación permitirá desenvolver los cimientos de un poder ejercido por la mayoría de los trabajadores y el pueblo.

El EDI es la antítesis de las fundaciones que adiestran a los economistas del capital. No es un filtro de selección del próximo Ministro de Economía, ni rinde examen frente a banqueros en Washington y los empresarios en Buenos Aires. La vocación del EDI es contribuir a la formación de las fuerzas que harán realidad la reconstrucción popular de nuestra economía.

17 de julio de 2002.

claudiok@arnet.com.ar.